

Punta Arenas, catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece en la presente causa, ROL N°283-2024, a la cual se acumuló la causa ROL N°362-2024, Gabriela del Pilar Díaz Cruz y Jessica Alejandra Vargas Cornejo, respectivamente, abogadas con domicilio en Bandera N°84, comuna y ciudad de Santiago, en favor de CARLOS ALBERTO ANDRÉS ALBISTUR REYES, chileno, casado, representante de la UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDOR, conformada por la CONSTRUCTORA CARLOS ALBERTO ANDRES ALBISTUR REYES E.I.R.L., INMOBILIARIA CA SPA y don MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ VENEGAS, chileno, casado, Factor de Comercio, todos con el mismo domicilio reseñado previamente y deducen acción de protección constitucional en contra la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS**, RUT 69.250.200-0, representado por su Alcalde **Claudio Andrés Radonich Jiménez**, chileno, domiciliado en PLAZA MUÑOZ GAMERO 745, Punta Arenas, y en contra del **GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA**, representado legalmente por **Jorge Mauricio Flies Añón**, Gobernador Regional, domiciliado en Bories 901, Punta Arenas.

Refiere que, a fin de dar cumplimiento al principio de Estricta Sujeción a las Bases, se compró e instaló adoquines de piedra natural extraída de una cantera, conforme a la calidad exigida en las especificaciones técnicas de la obra, la que fue visada y aprobada por la Municipalidad respectiva, acreditando su procedencia.

Acusa que el 8 de septiembre de 2023, se notificó mediante carta el Ordinario N°508 de la Dirección de Obras Municipales, que informa al recurrente la existencia de problemas de fisuración y deterioro en las piedras naturales, solicitando la reposición de estas, lo anterior, fundamentado en el Informe de Situación actual de piedras naturales Plaza de Armas de Punta Arenas, elaborado por la Inspectora Técnica de la Obra.

Luego, de abordar aspectos de la ejecución del contrato, refiere que con fecha 10 de octubre de 2023, por decreto Alcaldicio N°2933, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas,

resolvió hacer efectiva la póliza de seguros N°006311, por un monto de 2.808,00 UF extendida por ORSAN Seguros de Crédito y Garantía SA a favor del Gobierno Regional XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, RUT N° 72.229.800-4, tomada por la empresa CONSTRUCTORA CARLOS ALBERTO ANDRES ALBISTUR REYES E.I.R.L. RUT 76.346.498-9.

Precisa que el 29 de abril de 2024, a sus representados se les solicitó, mediante el oficio ordinario N°264, emitido por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, extender la vigencia de la garantía de buena ejecución en relación al contrato de obra "Mejoramiento y Conservación Plaza Benjamín Muñoz Gamero, Punta Arenas", ello por instrucción de la Dirección de Presupuesto e Inversión Regional (DPIR) del Gobierno Regional, **esto mientras dicha entidad resuelve si hacer efectiva o no la garantía indicada**, vulnerando así su derecho de propiedad e igualdad ante la ley, ya que ni las Bases Administrativas, el Contrato de obra, ni la Ley contemplan la obligación de extender una garantía de buena ejecución del contrato de obra, menos en circunstancias que el período de buena ejecución garantizado finalizó el 2 de mayo de 2024.

Añade en causa ROL 283-2024. que en el presente caso la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, exige de manera ilegal y arbitraria, que se prorrogue extensión de la garantía de buena ejecución, ello pese a que con fecha 2 de mayo de 2024 finalizó el período garantizado, cabe destacar que dicha prórroga no es contemplada en la Ley, en las Bases Administrativas ni en el mismo Contrato, lo que viene en evidenciar la absoluta arbitrariedad ante las cual nos hallamos.

Por su parte, en causa ROL 362-2024, afirma que el decreto alcaldicio N°2933, no fue producto de ningún tipo de procedimiento administrativo, ni mucho menos dio lugar a uno, ya que únicamente se limitó a informar la decisión de hacer efectiva la póliza, negando toda posibilidad a que mi representado hiciera valer sus derechos.

Alega que el 22 de mayo de 2024, sus representados, por medio de correo electrónico, se enteraron que las recurridas cobraron la garantía de buena ejecución de la obra, por el monto de 2.808 UF, número de instrumento 006311, vulnerando así su derecho de propiedad e igualdad ante la ley, ya que el contrato de obra no contempla la obligación de constituir una garantía de buena ejecución del contrato de obra.

Así las cosas, en el presente caso la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, exigió de manera ilegal y arbitraria el cobro de la garantía de buena ejecución, sin que previamente se haya dictado un decreto alcaldicio notificado a los recurridos, ello pese a que con fecha 2 de mayo de 2024 finalizó el período garantizado, cabe destacar que dicha prórroga no está contemplada en la Ley, en las Bases Administrativas ni en el mismo Contrato.

Luego, de invocar normas constitucionales y legales en favor de sus argumentaciones, refiere sobre los presupuestos de forma y fondo y concluye el actuar ilegal y arbitrario de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y de la Dirección de Presupuesto e Inversión Regional (DPIR) del Gobierno Regional, en la presente causa y la acumulada respectivamente, consisten en:

1.- Que, exigir la extensión de la Garantía de Buena Ejecución, mediante el oficio ordinario N°264, de fecha 29 de abril de 2024, emitido por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, por instrucción de la Dirección de Presupuesto e Inversión Regional (DPIR) del Gobierno Regional, esto mientras dicha entidad resuelve si hacer efectiva o no la garantía indicada, vulnera el derecho de propiedad e igualdad ante la Ley, ya que el ni el contrato de obra, ni las Bases Administrativas contempla la obligación de prorrogar la vigencia de la garantía de buena ejecución de la obra bajo dicho supuesto, menos encontrándose vencido el período de tiempo de buena ejecución de la obra en comento.

2.- Que, cobraron la garantía de buena ejecución de la obra, por el monto de 2.808 UF, número de instrumento 006311, institución bancaria ORSON SEGUROS, cuando la garantía ya

estaba vencida de acuerdo con los plazos previstos en el contrato de obra y las bases administrativas, es decir ya habían transcurrido 18 meses desde la recepción provisoria de la obra, vulnerando así el derecho de propiedad e igualdad ante la ley de los recurrentes.

Con todo, acusan como garantías conculcadas la contemplada en artículo 19 N°2 y N°24, de la Constitución Política de la República de Chile.

En ese mismo orden, pide se acoja la acción constitucional impetrada y consecuentemente, se ordene:

Se deje sin efecto, oficio ordinario N°264, de fecha 29 de abril de 2024 emitido por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas; continuar el ejercicio de sus facultades y obligaciones en relación con la obra "Mejoramiento y Conservación Plaza Benjamín Muñoz Gamero, Punta Arenas", con estricto apego a la normativa que regula la materia, especialmente asegurando los principios de legalidad; efectuar la recepción definitiva de la obra, su liquidación y la devolución de la boleta de buena ejecución; disponer toda otra medida que se estime pertinente para restablecer el imperio del Derecho; y, se condene en costas a las recurridas.

Con fecha 29 de mayo del presente, a folio 14, en causa 283-2024, comparece Michael Furniss Cifuentes, abogado por la recurrida Ilustre Municipalidad de esta ciudad y evacua informe.

Describe los antecedentes del recurso interpuesto y contextualiza los hechos contenidos en el recurso, señalando que por convenio mandato completo e irrevocable de fecha 23 de marzo de 2017, el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena encargó a la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento y Conservación Plaza Benjamín Muñoz Gamero, Punta Arenas", código BIP 30130471, el cual fuere aprobado por resolución exenta (DAC) N° 37, de fecha 03 de abril de 2017, de ese origen, y por decreto alcaldicio N° 882 "B", de fecha 13 de abril de 2017, de esta entidad.

Posteriormente, con fecha 05 de noviembre de 2020, se celebró el mandato suplementario del convenio precedente, el cual fuere aprobado por resolución exenta (DPIR) N° 402, de fecha 05 de noviembre de 2020, del Servicio de Gobierno Regional.

Luego, refiere sobre el contrato celebrado entre las partes contempló un plazo de ejecución y duración de 365 días corridos, el cual concluyó el día 02 de octubre de 2022.

Sostiene que, al concluir el plazo de ejecución y duración del contrato, con fecha 02 de noviembre de 2022 la Municipalidad efectuó la recepción provisoria de la obra Y comenzó a correr el periodo de garantía de la obra, el cual se estableció en 18 meses.

Afirma que, tal como indican las bases, si durante el periodo de garantía no se verifican hechos que exijan solución por parte del contratista, la Municipalidad procederá en efectuar la recepción definitiva de la obra y la liquidación del contrato respectivo.

Arguye que si durante el periodo de garantía se verificaren hechos que exijan su reparación, la informante requerirá al contratista su solución. Si la contrista se negare, existían dos alternativas: a) Ejercer acciones legales que busquen determinar la responsabilidad civil; b) Solicitar al GORE, en su calidad de mandante, cobrar la garantía de buena ejecución de la obra.

Explica que mediante el Ord. N° 508, la unidad técnica del proyecto puso en conocimiento del contratista un desperfecto detectado en la obra relacionado con las piedras naturales instaladas en la loza de la plaza, solicitándole proceder a la reposición y acompañando el informe evacuado por la ITO, conforme el párrafo tercero de dicho articulado.

Y por carta de fecha 12 de septiembre de 2023, la contratista dio respuesta señalando, en síntesis, que no resulta procedente la restitución de las piedras naturales que indica, por cuanto la causa de su deterioro no es imputable a esa contratista.

Acusa que el contratista se negó a reparar la obra, y que por decreto alcaldicio N° 2933 "B" de fecha 10 de octubre de 2023, esa Administración dispuso hacer efectiva la póliza de seguros N° 006311, por un monto de 2.808,00 UF, extendida en favor del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 48.3 de las bases administrativas de la licitación. El fundamento del acto administrativo precedente no es otro que el haber detectado fallas en la ejecución de la obra, las cuales fueron puestas en conocimiento de la contratista y sin que esta última haya arbitrado acciones tendientes a la reparación, por lo cual, se procedió en conformidad al párrafo séptimo de ese articulado.

Agrega que por Ord. N° 782 (DPIR), de fecha 23 de octubre de 2023, el GORE acusó recibo del decreto alcaldicio N° 2933 "B" de fecha 10 de octubre de 2023, solicitando complementar los antecedentes para efectos de iniciar el proceso de ejecución de la garantía de buena ejecución de la obra.

Dice que por Ord. N°1627 de fecha 23 de noviembre de 2023, esa Administración dio respuesta fundada al Ord. N°782 (DPIR) de fecha 23 de octubre de 2023, acompañando la totalidad de los antecedentes solicitados y requiriendo un pronunciamiento en su calidad de mandante de la obra, en el sentido de determinar la procedencia de reparar las obras conforme ofreció la contratista por carta de fecha 20 y 23 de octubre de 2023, o bien, ejecutar la garantía de buena ejecución de la obra, conforme fuere decretado con fecha 10 de octubre de 2023.

Explica que por carta recepcionada con fecha 24 de noviembre de 2023, la contratista solicitó, previo a proceder a la reparación, se proceda a un peritaje de aquellos adoquines defectuosos, con el objeto de conocer a ciencia cierta la causa de su rotura y verificar la vía más adecuada para ejecutar la reparación y garantizar el buen resultado de la obra.

Señala que por Ord. N°850, de fecha 05 de diciembre de 2023, el GORE solicitó a esa entidad antecedentes complementarios para mejor resolver el pronunciamiento requerido mediante Ord. N°1627 de fecha 23 de noviembre de 2023, particularmente, un peritaje a través de un laboratorio certificado, *"a fin de esclarecer que el material solicitado en las especificaciones técnicas del contrato no es adecuado para utilizarlo en esta zona."*

Alude que por Ord. N°1666, de fecha 11 de diciembre de 2023, esta entidad solicitó nuevamente al GORE hacer efectiva la boleta de buena ejecución de la obra, conforme a los antecedentes expuestos en dicha comunicación y teniendo especialmente presente, lo previamente decidido mediante decreto alcaldicio N°2933 "B" de fecha 10 de octubre de 2023, este último, en conocimiento previo del Gobierno Regional.

Afirma que, en respuesta a la comunicación precedente, por Ord. N°869 (DPIR) de fecha 20 de diciembre de 2023, el GORE solicitó información fundada respecto a la decisión de no dar continuidad a la propuesta de reparación del contratista, como así también informar las alternativas técnicas para solucionar la problemática de la obra.

Por Ord. N°01 de fecha 02 de enero de 2024, esta Administración evacuó respuesta al Ord. N°89 (DPIR) de fecha 20 de diciembre de 2023, solicitando nuevamente hacer efectiva la garantía de buena ejecución de la obra, lo cual fuere solicitado mediante el acto administrativo dictado al efecto con fecha 10 de octubre de 2023.

En respuesta a la comunicación que precede, por Ord. N°03 (DPIR) de fecha 08 de enero de 2024, el Gobierno Regional insistió en arbitrar medidas para determinar la causa que originó el pronto deterioro de los adoquines de piedra natural instalados en la obra, con el objeto de determinar el cumplimiento de las causales necesarias para proceder al cobro de la garantía de interés.

Luego de múltiples requerimientos y comunicaciones recíprocas, menciona que por Ord. N 332 (DPIR), de fecha 23 de abril de 2024, el Gobierno Regional concluyó que la

deficiencia del material instalado en la obra no puede endosarse al contratista, por lo que solicitó a esa entidad requerir a la contratista la extensión de la vigencia de la garantía en tanto se tramita la recepción definitiva o el término anticipado del contrato y se eleva una consulta al órgano contralor.

Finalmente, en cumplimiento de lo requerido por la mandante, por Ord. N°264, de fecha 29 de abril de 2024, la unidad técnica requirió a la contratista la extensión de la garantía de buena ejecución de la obra, el cual fuere notificado con misma fecha.

Refiere sobre el pronunciamiento de la Contraloría Regional de Magallanes y de Antártica Chilena, Ante la dilación y negativa del Gobierno Regional para cobrar la garantía referida **-se le solicitó el 10 de octubre de 2023-**, con fecha 07 de mayo de 2024 esta Municipalidad recurrió a la Contraloría Regional de Magallanes, con el objeto de que se pronunciara sobre la improcedencia de dicha determinación.

Destaca que por **Oficio E485824/2024**, de fecha 09 de mayo de 2024, la Contralora Regional de Magallanes razonó y concluyó lo siguiente: Que se verificaron deficiencias en los adoquines de piedra natural instalados en la plaza; Que la Municipalidad no exigió más que instalar adoquines de piedra natural de buena calidad; Que el contratista se negó a reparar la obra y era su obligación hacerlo; Que la garantía de buena ejecución se dispuso para garantizar la buena ejecución de la obra, y procede su cobro si el contratista no repara dentro del plazo de garantía; Que la Municipalidad actuó dentro de sus facultades y obligaciones contractuales; y, que el Gobierno Regional debe proceder al cobro de la garantía de buena ejecución de la obra.

Alega que aun cuando se verificare la improcedencia se solicitar la extensión o prórroga de la garantía de buena ejecución de la obra extendida en favor del Gobierno Regional, aparece que el acto recurrido no amenaza, perturba ni priva el ejercicio de los derechos fundamentales de los recurrentes, por cuanto: el acto recurrido no es un acto

administrativo con poder decisorio, toda vez que constituye una mera solicitud. Frente a ello, las recurrentes tenían tres opciones: acceder a la solicitud; negarse; o, no hacer nada.

En los hechos, aparece que las recurrentes derechamente no hicieron nada y desatendieron la solicitud de extensión o prórroga de la garantía, verificándose el vencimiento de la boleta o su cobro dentro de plazo conforme estipuló el contrato, por lo que mal puede entenderse un hecho lesivo en los términos planteados.

Afirma que la solicitud efectuada mediante el acto recurrido fue ineficaz, por cuanto la garantía, o ya se cobró por parte del GORE o derechamente venció.

Hace consideraciones finales en cuanto al petitorio:

1) *"Que se deje sin efecto el Oficio N° 264 de fecha 29 de abril de 2024, de este origen":* **Dicha solicitud perdió eficacia**, por las consideraciones expuestas en el título anterior, razón por la cual, aun cuando se determine su improcedencia a la luz de las cláusulas contractuales, no genera en las recurrentes una afectación en sus garantías fundamentales.

2) *"Que se ordene a la Municipalidad a continuar con el ejercicio de sus facultades y obligaciones en el marco del contrato referido, con estricto apego a la normativa que regula la materia":* Como se indicó previamente, **el contrato se encuentra concluido por el vencimiento del plazo convenido**, como así también, el periodo de garantía se encuentra vencido, habiéndose procedido a la liquidación del contrato y sin que existan obligaciones pendientes por parte de esta Municipalidad.

Argumenta que, en cualquier caso, la Municipalidad cumplió tanto con sus obligaciones como con sus prerrogativas contractuales, lo cual fluye de las actuaciones indicadas precedentemente y de lo dispuesto en la letra O) del artículo 33, en relación con el artículo 48.3, ambos de las bases administrativas de la licitación, parte integrante del contrato celebrado entre las partes.

3) "Que se ordene a la Municipalidad a efectuar la recepción definitiva de la obra, su liquidación y devolución de la boleta de buena ejecución": **Dicha solicitud es improcedente en el contexto del recurso interpuesto.** Cabe recordar que los recurrentes accionan en contra del Oficio N° 264 de fecha 29 de abril de 2024, de esta entidad, el cual no se relaciona con la ejecución del contrato de autos.

Concluye que, por su parte, efectuar la recepción definitiva de la obra y la devolución de la garantía es improcedente a la luz de los hechos y las obligaciones contractuales, toda vez que se verificaron desperfectos en la obra que el contratista no reparó y se negó rotundamente a ello, razón por la cual, de acuerdo con las reglas contractuales, **se procedió a requerir el cobro de la boleta de garantía y a liquidar el contrato con fecha 03 de mayo de 2024.**

Enfatiza que, en base a lo anterior, **el recurso perdió oportunidad y finalmente** y a propósito de la discusión de autos, mediante Ord. 584 de fecha 07 de mayo de 2024, esa entidad recurrió a la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, quien dictaminó que lo obrado por esta entidad se ajustó a derecho, siendo resorte del Gobierno Regional proceder al cobro inmediato de la póliza de seguros referida.

Reclama que la recurrida estima que no se verifica acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive sus garantías fundamentales y, en cualquier caso, el recurso perdió oportunidad, razón por la cual instamos por su absoluto rechazo.

Con fecha 19 de junio del presente, en causa 283-2024, folio 18, comparecen Gabriel Andrés González Florín Y Marcos Alejandro Loaiza Miranda, Abogados, en representación del Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, representante del Gobierno Regional de magallanes y de la Antártica Chilena y evacua informe.

Refiere sobre inadmisibilidad de la acción, negando las imputaciones practicadas en su contra, pues actuó de manera

adecuada y siempre y en todo caso con apego absoluto a la normativa que rige el asunto y en ese sentido la ejecución del mencionado proyecto corresponde a la recurrida Municipalidad de Punta Arenas y no a su representada que deviene de la suscripción de un convenio mandato, competo e irrevocable para estos efectos sostiene en definitiva que, es un asunto de larga discusión y que el presente recurso no es la vía idónea y argumenta al efecto.

Asimismo, acusa falta de fundamento y que los consignados son contradictorios.

Sostiene que al momento de pronunciarse sobre hacer efectiva la garantía tomada para resguardar la buena ejecución del contrato y del análisis de los antecedentes acompañados, en particular el informe del analista del proyecto, don Rodrigo Pérez Oyarzún, resultaba pertinente indicar que el supuesto de cobro de la póliza, exigía la determinación de la responsabilidad del tomador de aquella, y la necesaria causalidad entre su comportamiento y sus consecuencias y que fue correcto afirmar que, en caso de comprobarse la responsabilidad del contratista, habría de procederse con la solicitud del municipio y en caso contrario, declarar que no se puede proceder del modo propuesto.

Cuestiona, ¿De dónde arranca la exigencia de garantizar la buena ejecución de la obra contratada?, y argumenta que aquellas fluyen de las Bases Administrativas y Técnicas, ergo, contrato y afirma que es la propia recurrente quien, al intentar dar fundamentos jurídicos a su acción, refuerza las razones del desecho de su pretensión.

Agrega que el contratista que recurre asumió que el instrumento entregado en garantía aseguraba la buena ejecución de sus trabajos, cosa respecto de la que su mandante el municipio de Punta Arenas discrepó y concurriendo los supuestos contractuales, lo que procedía era el cobro de dicha póliza.

Enuncia aspectos sobre quien se aprovecha de su propio dolo en relación con los hechos y acciones consignadas en el

recurso y expone que no ha sido la autoridad administrativa la que ha creado "*diferencias arbitrarias*". Fueron los contratantes los que acordaron que así sería. Hechos propios. Fue la recurrente la que, aceptando las Bases Administrativas y Técnicas, ofertando en aquel marco, suscribió contrato con la Municipalidad de Punta Arenas, obligándose a garantizar la fiel ejecución de sus obras, entre otras cosas.

Concluye reiterando que el municipio exija la extensión de la garantía de buena ejecución es una obligación legal y aquel debe velar por la correcta aplicación de los fondos recibidos o asignados para la correcta ejecución de la obra encargada. Las garantías (huelga la discusión extensa) son obligaciones accesorias.

Y adiciona que, pretender que la garantía esté sujeta a un plazo (dos de mayo de 2024) distinto del que consigna el instrumento que la materializa (10 de mayo de 2024) es descabellado. La garantía accede a la obligación principal. Estando aquella pendiente, la garantía DEBE estar vigente. Señala la recurrente que lo que le afecta no es el cobro de la boleta o póliza de garantía. Lo que amaga sus derechos es que se le haya solicitado que la extendiera hasta la correcta ejecución de sus obligaciones principales.

Con fecha 9 de julio del presente, a folio 27, por causa acumulada 362-2024, comparece Cristian Patricio Navarro Kamann, abogado por la recurrida Ilustre Municipalidad de esta ciudad y evacua informe.

Advierte que entendido que los hechos que han servido de fundamento al Recurso de Protección son los mismos que sustentan el recurso Rol N°283-2024, se remite a lo ya informado a folio 14 autos, con las siguientes precisiones:

Alega falta de legitimación activa, no obstante, en su escrito, consigna que su representada carece de legitimación pasiva toda vez que la facultad de cobro de la garantía objeto del contrato se encuentra radicada en el Gobierno Regional y no en el Municipio. Mas aun el Municipio solicitó la ejecución de la garantía por Ordinarios N°1666, de fecha

11 de diciembre de 2023 y N°01 de fecha 02 de enero de 2024, siendo de facultad del Gobierno Regional su cobro.

A su vez, reclama extemporaneidad, pues es un hecho notorio que el recurrente ha estado el conocimiento de los hechos que sirven de fundamento a su recurso, más allá del plazo establecido para la interposición de la Acción Constitucional de Protección, toda vez que sus fundamentos son los mismos que aquellos que han servido de fundamento al Recurso N°283-2024, interpuesto con fecha 07 de mayo de 2014.

Y agrega finalmente, que el recurso no se funda en derechos indubitados, que devienen **de** la sola lectura del petitorio Recurso y del fundamento del mismo, pues queda de manifiesto que lo alegado son hechos controvertidos propios de los efectos de un contrato y la acción de autos no es idónea para ello, por cuanto ésta, no ha sido creada para solucionar conflictos que se encuentren relacionados con los efectos de un contrato, sino sobre derechos indubitados y las alegaciones del recurrente distan de poder catalogarse como derechos indubitados, toda vez que corresponden a situaciones de hecho que escapan a la naturaleza del presente recurso, debiendo analizarse a la luz de un procedimiento de lato conocimiento.

Con fecha 8 de agosto del presente, a folio 33, por causa acumulada 362-2024, comparecen Gabriel Andrés González Florín Y Marcos Alejandro Loaiza Miranda, Abogados, en representación del Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, representante del Gobierno Regional de magallanes y de la Antártica Chilena y evacua informe.

A su respecto, reitera latamente los argumentos expuestos en informe evacuado a folio 18, precisando en su alegación de inadmisibilidad que la presente acción versa sobre idéntica materia con la pequeña salvedad de estimar la recurrente que se habría materializado el cobro de la garantía.

Piden, todos y cada uno, de los informantes, tener por informado los recursos y en definitiva se rechacen las

acciones constitucionales pretendidas por las recurrentes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del

texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, en la especie se ha deducido recurso de protección Gabriela del Pilar Díaz Cruz y Jessica Alejandra Vargas Cornejo, abogadas en favor de Carlos Alberto Andrés Albistur Reyes, representante de la UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDOR, conformada por la CONSTRUCTORA CARLOS ALBERTO ANDRES ALBISTUR REYES E.I.R.L., INMOBILIARIA CA SPA y don MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ VENEGAS.

Denunciando como ilegal y arbitrario, por una parte, que se haya prorrogado la extensión de la garantía de buena ejecución, pues con fecha 2 de mayo de 2024 finalizó el período garantizado y por otra, que el decreto alcaldicio N°2933, no fue producto de ningún tipo de procedimiento administrativo, ni mucho menos dio lugar a uno, ya que únicamente se limitó a informar la decisión de hacer efectiva la póliza, en comento, afectando derechos y garantías contemplada en artículo 19 N°2 y N°24, de la Constitución Política de la República de Chile.

CUARTO: Que, al evacuar informe las recurridas instan por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que, en cuanto a las alegaciones sobre falta de legitimidad planteada por la recurrida Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, será acogida, en virtud de las obligaciones que emanan del Convenio Mandato suscrito con la Ilustre Municipalidad de Puta Arenas, aprobado el 27 de marzo de 2017, toda vez, que en dicho instrumento, en su acápite séptimo, le corresponde a esa entidad, tomar a su nombre las garantías que caucionan el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales del proyecto encomendado, de modo que no carece de la legitimidad pasiva alegada.

SEXTO: Que, es necesario señalar que, tanto en el recurso interpuesto, como los informes evacuados por las

recurridas se logra constatar que, lo denunciando, tanto la extensión de la garantía como su cobro, fluyen de un reproche de supuestos contractuales que emanan del contrato denominado "Mejoramiento y Conservación Plaza Benjamín Muñoz Gamero, Punta Arenas", aprobado por resolución exenta (DAC) N° 37, de fecha 03 de abril de 2017, de ese origen, y por decreto alcaldicio N°882 "B", de fecha 13 de abril de 2017 y respectivo complemento.

Sin perjuicio, que la recurrente asegura no pretender discutir aspectos contractuales ni tampoco que esta Corte se pronuncie respecto del grado de cumplimiento o estatus de este, lo cierto, que, del mérito de los antecedentes acompañados, particularmente Ord. N°508, de fecha 31 de agosto de 2023, de la Dirección de Obras Municipales, en su calidad de unidad técnica, que pone en conocimiento del contratista los desperfectos relacionados con la obra solicitando reposiciones pertinentes durante el periodo de garantía y carta de fecha 12 de septiembre de 2023, suscrita por la recurrente, que afirma que no resulta procedente que esa parte iniciar el proceso de reposición, alegando entre otros, que tal informe no establece el defecto que presentan las piedras en relación con las especificaciones técnicas. Por consiguiente, el Informe no comprueba el defecto del material en relación con lo solicitado en la licitación.

Lo anterior, más allá del mérito de los diversos antecedentes técnicos aportados, resulta precisamente cuestiones de reproche contractual factico, que precede a lo que hoy, se denuncia ilegal y/o arbitrario, de modo que lo debatido no logrará acceder al remedio constitucional, pues obedecen a cuestiones de lato conocimiento.

SEPTIMO: Que, a su vez, el órgano contralor, mediante **Oficio E485824/2024**, de fecha 09 de mayo de 2024, consigna, luego de relacionar antecedentes pertinentes al debate, entre otros acápites, que: la garantía de buena ejecución se dispuso para garantizar la buena ejecución de la obra, y procede su cobro si el contratista no repara dentro del plazo de garantía; y, que la Municipalidad actuó dentro de sus

facultades y obligaciones contractuales y por tanto, el Gobierno Regional debe proceder al cobro de la garantía de buena ejecución de la obra.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, no puede estimarse que existe un actuar omisivo arbitrario o ilegal por parte de las recurridas, toda vez la Municipalidad, actuando en su calidad de mandatario, como unidad técnica, requirió la realización de garantía en comento a la autoridad facultada para ello, en cumplimiento de sus obligaciones, según el convenio aludido.

NOVENO: Que, entonces, no hallándonos en presencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible a las recurridas, no concurre en la especie la exigencia establecida en la letra a) del considerando segundo, por lo que la presente acción constitucional deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, **SE RECHAZA** el recurso de protección deducido por Gabriela del Pilar Díaz Cruz y Jessica Alejandra Vargas Cornejo, respectivamente, en favor de Carlos Alberto Andrés Albistur Reyes, representante de la UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDOR, conformada por la Constructora Carlos Alberto Andres Albistur Reyes E.I.R.L., Inmobiliaria CA SPA y don Miguel Alonso Hernández Venegas, Factor de Comercio en contra las recurridas, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

ROL N°283-2024 ACUMALADA (362-2024) . PROTECCION. -